

**TRIBUNA LIBRE / GONZALO GUIJARRO**

## *¿Quién teme a las evaluaciones?*

Como ustedes saben, los profesores de Secundaria rechazaron mayoritariamente el famoso incentivo de 7000 euros incluido en el llamado Plan de Calidad y Mejora, llegando incluso a ir a la huelga para dejar claro lo tajante y decidido de su postura frente a lo que muchos consideramos un intento de compra de aprobados. Pues bien, creo que un breve repaso a las actuaciones que, desde entonces, han tenido los defensores de la postura oficial puede resultar interesante y significativo.

La Consejería de Educación se empeña en mantener el plan, y dice que lo que ocurre es que los profesores no lo hemos entendido bien y que nos lo van a explicar mejor. Sin embargo, acto seguido, ante la convocatoria de huelga, la consejera se niega a entablar conversaciones con los sindicatos convocantes, pese a que está obligada a ello por ley. Con quienes sí que entabla negociaciones a toda prisa, curiosamente, es con los sindicatos partidarios del plan que, de repente, se han acordado de una homologación retributiva que habían olvidado.

La prensa afín a la Consejería (que suele coincidir con la que recibe subvenciones o jugosos contratos de la Junta de Andalucía) por una parte apoya la idea de que los docentes son duros de mollera y hay que explicarles las cosas más despacio, pero al mismo tiempo procura descalificar a los que rechazan el plan, acusándoles de demagogos, de llamar indignos a los profesores que no lo rechazan, de ser malos profesionales, de tener miedo a ser evaluados y de «no dar ni clavo». Por lo visto, la pedagogía progresis-

ta cambia radicalmente de métodos cuando se dirige a docentes.

Quizás la más graciosa de todas esas gratuitas descalificaciones sea la del miedo a ser evaluados. En primer lugar, por la suficiente razón de que en el dichoso plan no existe tal evaluación, pero también porque esa descalificación la hacen los que jalean a una Consejería que no destaca precisamente por su transparencia. Por si lo han olvidado, la anterior consejera ocultó en 2002 los datos del informe PISA referentes a Andalucía, negando que existieran. De hecho, el informe completo jamás se ha hecho público, pese a estar pagado con dinero de los ciudadanos.

Y es que la Consejería prefiere hacer sus propias pruebas; así por ejemplo, las de diagnóstico, que están elaboradas por una comisión secreta, de cuyos integrantes sólo conocemos lo deficiente de su sintaxis. Por cierto, que los resultados de las últimas tampoco se han hecho públicos, pese a ser obligatoria su publicación. Por otra parte, la Consejería de Educación se ha negado hasta la fecha a ser evaluada por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Tal vez,

para justificar de algún modo esta negativa a las molestas evaluaciones externas, la Consejería ha creado su propia agencia de evaluación, pero lo ha hecho de modo irregular, saltándose las normas que podían hacerla transparente y eficaz.

En resumen, que quienes parecen resistirse con uñas y dientes a ser evaluados son los políticos y «expertos» de la Consejería, no los profesores que rechazan el plan que, por cierto, también reclaman criterios de eficacia profesional y no ideológicos en el funcionamiento de la inspección.

Por último, los llamados sindicatos mayoritarios, es decir, los que apoyan decididamente el plan, como ya he dicho, se apresuraron a negociar con la Consejería la homologación salarial para el presente año, que se les había olvidado. Las negociaciones fueron vertiginosas; en cosa de horas ya habían alcanzado un acuerdo. Y eso que la huelga no la convocaban ellos.

Una vez con el acuerdo en la mano, Comisiones Obreras, por ejemplo, ha aprovechado para sumarse con entusiasmo al coro que descalifica e insulta a esa mayoría de profesores que rechaza el plan. En la página

web de su sección de Cádiz, por ejemplo, se llamaba mentirosos y farsantes a los convocantes de la huelga, a los que se acusaba de haber engañado al profesorado.

Creo que todo lo anterior pone de manifiesto la enorme inquietud que el despertar de los docentes, tras su duradero letargo, provoca en cuantos habían encontrado un modo de vida al amor del desastre educativo. Políticos incompetentes, falsos expertos, pedagogos ignaros, sindicalistas con vocación vertical y enchufados de toda la ya reaccionan como sólo los que carecen de argumentos acostumbran a reaccionar: con la descalificación y el insulto, con acusaciones sin fundamento, con el rechazo a todo debate que no sea entre correligionarios, con la escenificación de negociaciones que, de no ser por la convocatoria de huelga, es muy dudoso que se hubieran producido.

Y es que no por casualidad la actual lamentable situación de nuestro sistema de enseñanza se prolonga curso tras curso. Sin unos ocultos e inconfesables intereses de por medio, ya se habrían puesto en tela de juicio los aberrantes principios pseudopedagógicos que nos han conducido a donde estamos. Pero, al parecer, hay demasiadas personas interesadas en que no sea así, y por eso la Consejería persiste en la elaboración de «planes» inanes, cuando no directamente dañinos, para la enseñanza, para finir que intentan mejorarla.

---

Gonzalo Guijarro es miembro de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).